

# Pujol hará públicas las actas de la Comisión Mixta de valoración de transferencias

Barcelona. Margarita Sáenz-Díez

A partir del próximo lunes se harán públicas las actas levantadas tras cada una de las reuniones celebradas por la Comisión Mixta de valoraciones de las competencias transferidas a la Administración autónoma catalana. Esta decisión responde a la voluntad del Gobierno de Jordi Pujol de mostrar que las negociaciones y los acuerdos se realizaron correctamente y que no existe, por tanto, esa sobrevaloración denunciada por el Gabinete de Felipe González.

La falta de acuerdo sobre las cantidades que deberá recibir Cataluña por todos esos servicios que ahora son administrados desde los órganos autonómicos, es decir, las importantes discrepancias que se registran en torno al porcentaje de participación de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado puede llegar a bloquear la máquina administrativa catalana en algunos puntos, especialmente los referidos a inversiones en obras públicas. El presupuesto de la Generalidad para 1982 se hizo de acuerdo con los criterios establecidos en la mencionada Comisión Mixta. En consecuencia, la Cámara catalana, a raíz del acuerdo de todas las fuerzas políticas, aprobó una partida de ingresos de 126.000 millones de pesetas que ahora, si prosperan las tesis del Ministerio de Administración Territorial, pudieran quedar rebajados en unos 20.000 millones.

La suspensión de las reuniones de la Comisión Mixta ha supuesto, paralelamente, la puesta en marcha de una negociación colateral que permita llegar a puntos de acuerdo. Para el Gobierno de Jordi Pujol es imprescindible la continuidad en la financiación del presupuesto y, al mismo tiempo, le resulta también muy necesario, desde la perspectiva de las relaciones políticas, que se despeje la denuncia formulada en su día por María Izquierdo, cuando todavía no era secretaria de Estado para las autonomías, relativa a unos supuestos pactos secretos con UCD, mediante los cuales Minoría Catalana comprometía sus votos respecto a un determinado proyecto de ley y, a cambio, se valoraban con cierta «generosidad» algunas transferencias.

Tras el acceso al Gobierno, los socialistas no han insistido en esa denuncia —denuncia

que fue rechazada siempre tajantemente por los representantes de la Minoría Catalana—. No obstante, no han renunciado a señalar que mantienen importantes discrepancias sobre el ajuste de las valoraciones y proponen una revisión conjunta de las mismas. La representación catalana en la Comisión Mixta responde, invariablemente, que las cantidades pactadas «fueron acuerdos institucionales» y que no deben modificarse porque haya habido un cambio de Gobierno.

En el transcurso de esta polémica, agriada por el retraso con que se están confeccionando los presupuestos de 1983, que también repercuten, obviamente, en los presupuestos del autogobierno catalán, se sitúa la confrontación electoral municipal, en la que participará el presidente de la representación catalana en la Comisión Mixta, Ramón Trías Fargas. Asimismo, el papel de los socialistas catalanes puede quedar un tanto desairado en la medida en que los acuerdos tomados por ellos en Cataluña, como el referido a los 126.000 millones de la partida de ingresos para el presupuesto de la Generalidad para 1982, no se consideran ajustados. Todo parece indicar, no obstante, que tras este cúmulo de manifestaciones públicas, de cada una de las partes contendientes se está llevando a cabo una aproximación en la búsqueda de unas cifras intermedias que permitan superar el aparente callejón sin salida en el que se encuentra esta cuestión.